

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 24° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-8770-2020
CARATULADO : MAIRE/FISCO DE CHILE - CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, quince de Julio de dos mil veinticuatro

VISTOS.

Con fecha 9 de junio de 2020, al folio 1, don Boris Paredes Bustos, abogado, domiciliado en Pasaje Dr. Sótero del Río N°326, oficina N°707, comuna de Santiago, en representación de don **Jorge Patricio Maire Orrego**, cédula de identidad siete millones cincuenta y tres mil doscientos quince guión ocho, empleado, domiciliado en Angamos Nro. 888, comuna de Victoria; de don **René Maire Orrego**, cédula de identidad seis millones cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y dos guión siete, pensionado, domiciliado en Santa Teresa Nro. 206, Población Santa Teresita, comuna de Machalí; de don **Víctor Hugo Maire Orrego**, cédula de identidad cinco millones seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos sesenta y dos guión cuatro, asesor contable, mismo domicilio anterior; y de don **Gastón Maire Orrego**, cédula de identidad cinco millones ciento setenta y cinco mil ciento cuatro guión tres, contador, domiciliado en Juana de Arco Nro. 2080, depto. 24, comuna de Providencia, interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del **Fisco de Chile**, representado legalmente por don Raúl Letelier Wartenberg, abogado, Presidente del Consejo de Defensa del Estado, ambos con domicilio en Santiago, calle Agustinas N°1.687, comuna de Santiago, a fin de que se declare en definitiva el derecho de los actores a ser indemnizados por los actos ilícitos descritos en la demanda, cometidos por agentes del estado y condenando al Fisco de Chile a pagarles la suma de \$200.000.000 a cada uno, o la suma que en justicia se sirva fijar el tribunal, con costas.



Foja: 1

Indica que los hechos descritos en la demanda han sido reconocidos voluntariamente por el Estado de Chile a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Agrega que, si bien existe una clara vinculación de los hechos relatados, por el lugar en que se cometieron y, en algunos casos, por los hechos, además de una similitud en el tiempo, relatará de manera individual, pero resumida, las torturas, vejaciones y otros tratos inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos los demandantes por agentes del Estado y que constituyen el fundamento fáctico de esta demanda.

Relata sobre don **Jorge Patricio Maire Orrego**, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura, Valech 1, **Nº13.733**, nacido con fecha 31 de agosto de 1952, de actuales 67 años. A la fecha de ocurrencia de los hechos era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

“Detenido por agentes de la DINA en la vía pública, en la ciudad de Santiago, el día 10 de abril de 1975, en circunstancias que tres individuos se bajaron de un auto, sin identificación alguna, lo redujeron, lo lanzaron al interior de un vehículo, lo maniataron y pusieron scotch en los ojos y luego una venda. Mientras lo conducían a un lugar desconocido, comenzaron de inmediato a interrogarlo y a propinarle una salvaje golpiza. Al llegar al lugar de destino, subieron a don Jorge por una escalera y lo introdujeron a una pieza donde había un catre metálico, sin colchón. Lo obligaron a desnudarse, lo acostaron sobre el catre, le amarraron los pies y las manos a cada extremo del catre y procedieron a aplicarle corriente eléctrica en distintas partes del cuerpo, con la instrucción de que, cuando quisiera hablar, levantara un dedo.

El mismo día o al día siguiente, don Jorge es trasladado e ingresado al centro de torturas conocido como “Villa Grimaldi”. Lo bajan del vehículo a punta de golpes de puños y patadas y, entre los golpes, don Jorge distingue un portón metálico grande, de color rojo o ladrillo, al que intenta tirarse mi representado con el objeto de golpear su cabeza y perder el conocimiento, pues ya no aguantaba las torturas. En ese momento, recogen a don Jorge y lo arrastran hacia el interior, dejándolo sobre una especie de terraza. En ese momento, le tiran un balde de agua y lo suben a un catre



Foja: 1

metálico para nuevamente comenzar a aplicarle corriente eléctrica en distintas partes del cuerpo, fundamentalmente en la lengua, pecho, pene, testículos, dedos de las manos, mientras era interrogado acerca de sus “contactos”. Lo mantienen en Villa Grimaldi durante dos semanas, sometido al mismo régimen de torturas diariamente. Entre otros métodos de tortura que le aplicaron en este lugar, además de la aplicación de corriente eléctrica, está el haber sido hipnotizado por un médico a quien apodaban “el brujo”, quien, para corroborar que don Jorge no lo estaba engañando, lo quemaba con cigarros encendidos en las muñecas.

Al cabo de estas dos semanas, don Jorge fue ingresado al centro de detención denominado Cuatro Álamos, donde permanece una semana y luego lo trasladan en libre plática a Tres Álamos, lugar donde permanece detenido por tres meses. Luego es trasladado a Puchuncaví, permaneciendo detenido, en total, dieciocho meses, al cabo de los cuales sale en libertad, debiendo abandonar el país para salvar su vida, sin que se le haya formulado cargo de ninguna especie.

Producto de las torturas sufridas, don Jorge quedó con toda la zona de la boca rota por la aplicación de la corriente eléctrica, marcas de quemaduras de cigarrillos en las muñecas y mucho miedo y angustia a ser nuevamente detenido y torturado, padeciendo un trastorno de estrés post traumático con consecuencias hasta el día de hoy”.

Relata sobre don **René Maire Orrego**, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura, Valech, **Nº13.734**, nacido con fecha 28 de septiembre de 1950, de actuales 69 años. A la fecha de ocurrencia de los hechos era estudiante de Ingeniería en Ejecución Mecánica y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

“Fue detenido pocos días después del Golpe de Estado ocurrido el día 11 de septiembre del año 1973, en la ciudad de Rancagua, Sexta Región, en circunstancias que se encontraba en casa de un primo a quien había solicitado ayuda para refugiarse. Llegaron militares y civiles a este domicilio, un día de noche, y procedieron a detener a don René, interrogándolo acerca de sus actividades políticas y golpeándolo con sus armas en diferentes partes de su cuerpo. Luego, lo llevaron a la comisaría de la ciudad de Rancagua, ubicada en Avenida Kennedy, lugar donde lo



Foja: 1

ingresaron en una celda muy reducida, donde habían alrededor de 50 personas, todos hacinados, haciendo sus necesidades en el mismo espacio. Durante la noche, don René fue trasladado a otro lugar en la misma comisaría y sus captores procedieron a ponerlo en el suelo, boca abajo y con las manos atrás, y procedieron a propinarle golpes de puño, patadas y culatazos. Fue sometido, también, a simulacros de fusilamiento disparando al techo.

Al día siguiente, don René queda en libertad, con la obligación de presentarse todos los viernes en la fiscalía de la fuerza aérea de la ciudad de Santiago, ubicada en la calle Bulnes, donde era interrogado por un general de apellido Parodi. Durante cada interrogatorio, fue sometido a crueles torturas psicológicas consistentes en amenazas de muerte en caso de que no contestara adecuadamente las preguntas que le formulaban, además de que le mostraban fotografías de personas siendo torturadas y le decían que si él no cooperaba le iba a pasar lo mismo. Los interrogatorios y tortura psicológica, como se dijo, se realizaban cada quince días, durando el término de un año. Al término de cada interrogatorio, don René quedaba en pésimas condiciones psicológicas, muy angustiado y aterrado por lo que le podía pasar, viviendo en la total incertidumbre. Fue tal el trauma y estrés post traumático sufrido por don René, producto de la tortura física, pero fundamentalmente psicológica que sufrió, que fue incapaz de seguir estudiando, de tener un trabajo estable y formar una familia y, para olvidar un poco lo sucedido y sentirse más seguro, debió emigrar a la República Argentina, donde vivió varios años casi como un ermitaño, sin relacionarse prácticamente con nadie por el temor a que agentes del estado chileno conocieran su ubicación y fuera nuevamente torturado o asesinado”.

Relata sobre don **Víctor Hugo Maire Orrego**, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura, Valech, N°13.735, nacido con fecha 27 de marzo de 1947 de actuales 73 años.

“Fue detenido en el año 1975, en una fecha que le es difícil precisar, en circunstancias que se aprestaba a tomar un microbús de la línea Pila – Cementerio donde vivía su cuñada, cónyuge de su hermano Jorge Patricio. El objetivo de don Víctor Hugo era conocer el paradero de su hermano. Al subir a la micro, un sujeto de civil se colocó detrás de don Víctor Hugo,



Foja: 1

poniéndole un arma entre las piernas, más específicamente en los testículos, amenazándolo con que si se movía le iba a disparar. En ese momento, don Víctor se quedó quieto. El microbús siguió su recorrido, dobló por la Alameda y se detuvo a los pocos metros, momento en que su secuestrador lo obligó a bajar junto a su cuñada y los subieron a un vehículo que se encontraba estacionado. En ese momento, les vendaron los ojos y comenzaron la marcha con destino desconocido.

Al cabo de un rato y habiendo permanecido tanto don Víctor como su cuñada siempre vendados, mi representado reconoció la voz de su hermano Jorge. Sus aprehensores le preguntaron a Jorge si era “Pedro”, a lo que éste contestó que no, que era su hermano. A continuación, comenzaron a torturar brutalmente a Jorge y a la mujer de este último, obligando a don Víctor a escuchar los gritos de su hermano y cuñada.

Refiere que durante su permanencia en un centro de reclusión que le fue desconocido, fue permanentemente interrogado acerca de las actividades políticas de su hermano y torturado, consistiendo las torturas en golpes de pies y puños en distintas partes de su cuerpo, aplicación de corriente eléctrica en genitales y simulacros de fusilamiento, siempre con los ojos vendados. En una oportunidad, lo sentaron en un banquillo y le apretaron los testículos con el filo de la bayoneta de un fusil, haciéndole creer que le habían amputado los genitales. Estuvo varios días sin ir al baño por temor a no tener nada, a haber perdido sus genitales. En otras ocasiones, lo encerraban en un calabozo junto al “Guatón Romo”, un conocido torturador, quien lo alentaba a que declarara todo a los militares y delatara a sus compañeros y en especial a su hermano. Pasados más de 30 días desde su detención, en una fecha que tampoco puede precisar, producto de las graves secuelas producto de las torturas, don Víctor Hugo fue sacado a un paseo en camioneta y, luego de varias horas de deambular por Santiago, lo lanzaron de la camioneta, con los ojos vendados y la camioneta en marcha. Atemorizado y desorientado, don Víctor deambuló hasta que logró ubicarse y darse cuenta que se encontraba en el sector de Tobalaba. Recorrió distintos lugares de Santiago sin saber qué hacer ni adónde ir hasta que se contactó con un compañero quien lo trasladó a Algarrobo, a una casa de seguridad, y después de un tiempo lo llevaron a las Termas de



Foja: 1

Jahuel, para posteriormente ser trasladado a Argentina, de manera clandestina, sin dinero y sin conocer a nadie. Gracias a unos amigos argentinos que conoció allá, pudo salvarse de los militares chilenos, quienes lo fueron a buscar varias veces para secuestrarlo. Desde octubre del año 1975 vive en Mendoza, Argentina.

Producto de las torturas y persecución política sufridas, don Víctor Hugo tiene serias dificultades para conciliar el sueño por las noches, mantiene una constante y persistente sensación de angustia y pena, con crisis de pánico, evidenciando un trastorno de estrés post traumático, todo lo cual se ve acrecentado por haber tenido que abandonar su país y su familia, hasta la fecha, para salvar su vida”.

Relata sobre don **Gastón Maire Orrego**, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura, Valech, **N°13.732**, nacido con fecha 08 de marzo de 1949 de actuales 71 años. A la fecha de ocurrencia de los hechos era estudiante universitario y militante del MIR.

“Fue detenido el día 29 de noviembre de 1973 en calle Blanco Encalada, frente a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, donde asistía a clases de Química, ciudad de Santiago, por el Fiscal de Aviación Alberto Parodi y un oficial de la Fuerza Aérea de Chile, quien lo apuntó con su arma. Le informan que el motivo de la detención es por ser militante del MIR. La denuncia la habrían hecho vecinos de su casa y también había sido mencionado en la confesión de un prisionero que era miembro del Partido.

Una vez detenido fue trasladado hasta las dependencias del Regimiento Tacna, ubicado al lado de la Escuela de Ingeniería, y luego lo llevaron al Cuartel de Investigaciones ubicado en calle General Mackenna, lugar donde se mantiene por alrededor de una semana. En este cuartel es interrogado a cualquier hora del día o de la noche, le vendaban los ojos, lo desnudaban, luego lo sentaban en una silla amarrado de pies y manos, le mojaban el cuerpo y posteriormente le aplicaban corriente eléctrica en la lengua y los genitales. También recibió golpes y patadas, insultos y burlas. La celda donde estaba detenido la llamaban “La Patilla”, había otras personas detenidas ahí, entre las que se encontraba el “Guatón Romo”, respecto de quien le indicaron que colaboraba con los torturadores. En los



Foja: 1

interrogatorios a los que fue sometido lo presionaban para que diera los nombres de sus compañeros y lugar donde estaban escondidas supuestas armas. Una vez que terminó el período de interrogatorios lo obligaron a firmar una declaración donde expresaba que no había recibido ningún tipo de apremios para obtener su confesión y le apercibieron a que declarara lo mismo en el probable Consejo de Guerra, de lo contrario volvería a ser interrogado y torturado. Con posterioridad a aquello lo trasladaron a la Cárcel Pública donde estuvo varios días incomunicado para luego pasar al régimen de libre plática. En ese momento se encontró con otros miembros del Partido como Ricardo Labarca y miembros de la dirigencia del sindicato de la industria Perlack de Maipú y otros presos como el exsenador Erich Schnacke y el General Alberto Bachelet, quien estaba preso en la galería de los militares.

Sale en libertad a principios del mes de abril del año 1974, con sobreseimiento temporal.

Cuando salió en libertad, toda su familia estaba dispersa, pues tanto él como sus hermanos habían sido denunciados como pertenecientes al MIR, motivo por el cual debió vivir en distintas casas, escapando de la persecución política, hasta que logra establecerse y encontrar un trabajo estable recién el año 1981.

Producto de las torturas sufridas y la persecución política, don Gastón padece crisis de angustia, dificultades para dormir y un permanente temor a ser nuevamente detenido y torturado, evidenciando síntomas de trastorno de estrés post traumático”.

Refiere que los tormentos ya han sido descritos para cada caso en particular y no tiene sentido relatarlos nuevamente, por lo que queda claro que, como consecuencia directa de las torturas producidas a los actores se desprende, inequívocamente, un perjuicio tanto psíquico, como físico inconmensurable provocado por el Estado de Chile durante el periodo del gobierno dictatorial. Los daños físicos y psíquicos tienen carácter de permanentes, pues, aunque hayan transcurrido más de cuarenta años de lo sucedido las personas continúan con secuelas producto de la privación de libertad y las distintas torturas a las que fueron sometidos, además de que



Foja: 1

muchos fueron obligados, directa o indirectamente, a abandonar el país, sin poder retornar, algunos incluso alejándose de sus familias.

Añade que estos daños emocionales, morales y materiales que necesariamente se causaron a las víctimas de torturas, son lo que estamos pidiendo en esta demanda sean indemnizados, pues, los daños tanto físicos como psíquicos son distintos de persona en persona, sin embargo, todos tienen en común el daño moral. El daño causado es obvio, público, notorio, y no hay quien pueda negarlo caprichosamente. Se trata de dolores y traumas humanos, que no hacen distinción para alojarse en el alma de quien los padece, atendiendo a condiciones sociales, políticas, culturales o religiosas.

Agrega que las angustias, padecimientos y dolores, sumadas a las incertidumbres, miedos, inseguridades, son fáciles de entender en su plenitud, y sólo cabe al sentenciador hacer una estimación fundada de su magnitud y del monto de la reparación. Por ello, es que demanda al Fisco de Chile, por daño moral, como consecuencia directa del secuestro y torturas de que fueron objeto los actores, el pago de \$200.000.000, para cada uno de los demandantes, suma que deberá ser pagada con reajustes de acuerdo con el IPC e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, más las costas del juicio; o en su defecto el monto indemnizatorio que se estime de conformidad con su apreciación y valorización del daño.

Reclama que el Estado es civilmente responsable de los hechos narrados, perpetrados por agentes del Estado, cuya responsabilidad se ha reconocido en Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación e Informe sobre Prisión Política y Tortura, la que emana de la Constitución y que ya existían, incluso, en la Constitución de 1925, en sus actas constituciones y en los artículos 4, 10 N°1 y 9, debiendo responder el Estado de todo daño provocado a los particulares en su ejercicio.

Invoca para su pretensión lo previsto en la Constitución Política de 1925, las Actas Constitucionales, artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 38 de la Constitución Política de la República; 4, 42 y 44 de la Ley N°18.575; 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 27 de la



Foja: 1

Convención de Viena; alegando que la indemnización debe ser proporcional al daño provocado, cierta y real.

Cita una serie de jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, que avalaría su pretensión.

Indica que se darían todos los presupuestos que obligan al Estado a indemnizar los perjuicios causados, existiendo un daño moral; una acción de agentes del Estado; un nexo causal; y no existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad.

Con fecha 14 de julio de 2020, al folio 15, contesta la demanda el Fisco de Chile, solicitando su rechazo, con costas, o en subsidio, se rebaje sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido, con fundamento, en primer lugar, en la excepción de reparación integral, por haber resultado ya indemnizado el actor, dado que conforme al ámbito de la llamada justicia transicional, se establecieron medios de reparación, por los cuales el Estado ha desembolsado a diciembre de 2015, en concepto de Pensiones: la suma de \$199.772.927.770, como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig); Pensiones: \$419.831.652.606, como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); Bonos: la suma de \$41.856.379.416, asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$22.205.934.047, por la ya referida Ley 19.992; Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888, asignada por medio de la Ley 19.123; Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$ 21.256.000.000. En consecuencia, a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de \$706.387.596.727, entre los cuales, se concedió a los afectados una pensión al amparo de la Ley N°19.992, anual y reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años, adicionalmente un aporte único de reparación Ley N°20.874 de \$1.000.000. Se agrega que concedieron otros derechos, como gratuidad en prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), en los servicios de salud del país, con la sola inscripción en la correspondiente oficina, cuyo programa cuenta con equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del programa, que incluye apoyo técnico y rehabilitación física; cuyo



Foja: 1

presupuesto, el año 2020, alcanzó a la cantidad de M\$4.580.892; en el ámbito educacional, se concedieron becas de estudios superiores y gratuidad en educación básica y media; y beneficios en vivienda a través de subsidios.

Indica que lo anterior, es sin perjuicio, de las reparaciones simbólicas, como actos positivos de reconocimiento, dirigidos esencialmente, a reducir el daño moral padecido por las víctimas de violaciones a los derechos humanos, como lo son un memorial en el Cementerio General en Santiago; el establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido, fijado para el 30 de agosto de cada año; la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; establecimiento del Premio Nacional de los Derechos Humanos; y la construcción de diversos memoriales y obras a lo largo del país, todo lo cual ha implicado grandes gastos económicos del Estado.

Expresa que la Corte Interamericana de Justicia ha valorado el esfuerzo del Estado de Chile, en su política de reparación de violaciones a los derechos humanos e, incluso, ha rechazado pretensiones indemnizatorias de personas que ya han recibido beneficios del Estado por ese motivo.

Alega que, por lo demás, resultaría incompatible la pretensión indemnizatoria del actor, con los beneficios establecidos en la Ley N°19.123 y evitar así, también, un sistema compensatorio que no genere desigualdades.

Opuso, además, en subsidio, la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida, la que sustentó en lo previsto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación al artículo 2497 del mismo cuerpo legal, considerando que aún, pudiendo entenderse suspendida la acción durante la dictadura militar, por imposibilidad de la víctima de poder ejercer dicha acción, igualmente desde la restauración de la democracia a la fecha de notificación de la demanda producida el 25 de junio de 2020, habría transcurrido en exceso el plazo de prescripción, como también, el plazo de extinción ordinaria del artículo 2515 del Código Civil.

Expresa que la imprescriptibilidad es una cuestión extraordinaria y requiere, siempre, de declaración explícita, que en el caso no existiría, además, que la indemnización, en caso alguno, puede tener un carácter punitivo, ni de desigualdad, precisando que ninguno de los instrumentos internacionales de derechos humanos aludidos por el actor establecen la



Foja: 1

imprescriptibilidad de acciones patrimoniales derivadas de delitos de lesa humanidad, ni prohíben la aplicación del derecho interno, citando y reproduciendo al efecto un fallo de la Corte Suprema de unificación de jurisprudencia, de 21 de enero de 2013.

Alega, por otra parte, que la indemnización pretendida resultaría excesiva, la cual no puede constituir una fuente de lucro o ganancia, debiendo el tribunal, en subsidio, regular el daño moral, considerando los pagos ya recibidos del Estado.

Refiere que, en cuanto al pago de reajustes e intereses, solo procederían una vez que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, dado que solamente en esa época se establecería la obligación.

Con fecha 22 de julio de 2020, al folio 18, replica el actor, reiterando lo expresado en su demanda y señalando, respecto de la excepción de reparación integral, resulta irreconciliable con la normativa internacional ya señalada en la demanda, porque el derecho común interno sólo es aplicable cuando no contradice el derecho internacional, en materias de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad.

Asegura que la excepción interpuesta por el Fisco consagraría un régimen de pensiones asistenciales, que no sería de ninguna manera incompatible con la indemnización perseguida, ya que estas reparaciones no dan cabida para reparar todo el daño que se les ha ocasionado a las víctimas. Por otra parte, no se habría establecido en las respectivas leyes ya mencionadas, ningún régimen de incompatibilidad con las indemnizaciones judiciales, ni mucho menos que su aceptación implique una renuncia a las acciones judiciales correspondientes.

Manifiesta respecto de la prescripción, que reitera su alegación de la supuesta imprescriptibilidad de la acción civil deducida, precisando la acción tendría carácter constitucional, conforme los tratados internacionales ratificados por Chile.

Precisa que al faltar norma expresa que regule la prescripción de las acciones de reparación por violaciones a los derechos humanos, debe aplicarse el derecho público como el derecho internacional.

Por último, respecto del monto demandado, reiteró lo expresado en su demanda, señalando que el tribunal fija el monto definitivo, haciendo



Foja: 1

presente que éstos se habrían aumentado en el tiempo, por los diversos tribunales; y que los reajustes e intereses, también, serán determinados por el tribunal respecto de su exigibilidad.

Con fecha 31 de julio de 2020, al folio 20, duplica la demandada, reiterando lo expresado en su contestación y aludiendo a la sentencia de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013 Sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno” que su parte transcribió en sus principales argumentos, en el escrito de contestación a la demanda, y especialmente a una sentencia de la Excma. Corte Suprema, caratulada “Domic Bezic, Maja y otros con Fisco”, ingreso CS. 4753-2001, de la cual transcribe algunos de sus considerandos.

Con fecha 13 de agosto de 2020, al folio 22, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que obra en autos.

Con fecha 17 de junio de 2024, al folio 51, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, don Boris Paredes Bustos, abogado, en representación de don Jorge Patricio Maire Orrego, don René Maire Orrego, don Víctor Hugo Maire Orrego y don Gastón Maire Orrego, interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por don Raúl Letelier Wartenberg, abogado, Presidente del Consejo de Defensa del Estado, y en definitiva aceptarla en todas sus partes declarando que el demandado deberá pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas de que fueron objeto, la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) a cada uno de los demandantes, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que se estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos, con costas.

Funda su pretensión en los argumentos de hecho y fundamentos de derechos relatados latamente en lo expositivo del presente fallo.

SEGUNDO: Que han resultado hechos no controvertidos en el proceso, aceptados por ambas partes, que los actores, efectivamente, fueron víctimas de violación de derechos humanos durante el desarrollo de la



Foja: 1

Dictadura Militar, y que el Estado ha efectuado acciones de reparación, mediante pensiones asistenciales y simbólicas.

TERCERO: Que la discusión esencial del pleito judicial ha rondado en cuanto a sí las acciones de reparación efectuadas por el Estado habrían sido suficientes para reparar el daño sufrido por los actores; en sí la acción deducida se encontraría prescrita; como también, en sí la pretensión indemnizatoria de los actores resultaría desproporcionada, relacionado ello con la extensión que habría tenido el daño moral que padecieron los actores.

Conforme al silencio de la demandada y de los actores, en su caso, deben estimarse controvertidos, además, los alcances o gravedad de los apremios que habrían padecido los actores en los periodos en que estuvieron detenidos por agentes del Estado.

CUARTO: Que la parte demandante rindió la siguiente prueba documental, a fin de justificar sus argumentos:

- 1) Artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad e incorporados en los autos rol C-22.561-2018, del 28º Juzgado Civil de Santiago, seguidos por la misma materia, agregado al folio 29.
- 2) Artículo titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad, agregado al folio 29.
- 3) Artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de julio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad, agregado al folio 29.
- 4) Artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, agregado al folio 29.



Foja: 1

- 5) Artículo titulado “Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos” del mes de junio del año 1989, suscrito por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Aux. Enf. Janet Ulloa, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad, agregado al folio 29.
- 6) Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech 1, agregado al folio 40.
- 7) Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 1 en la que don Jorge Patricio Maire Orrego figura con el número 13.733; don René Maire Orrego figura con el número 13.734; don Víctor Hugo Maire Orrego figura con el número 13.735 y don Gastón Maire Orrego figura con el número 13.732., agregado al folio 40.
- 8) Copia de antecedentes de carpeta de don Jorge Patricio, don René, don Víctor Hugo y don Gastón, todos de apellidos Maire Orrego, del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentados ante la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura, agregado al folio 40.
- 9) Informe pericial psicológico emitido por doña Ana María Vera Haro respecto de don Jorge Patricio Maire Orrego, de fecha 14 de abril de 2024, agregado al folio 41.
- 10) Informe médico – psicológico evaluación de daño emitido por el Prais del Servicio de Salud del Libertador General Bernardo O’Higgins, de don René Maire Orrego, de fecha diciembre de 2022, agregado al folio 41.
- 11) Informe psicológico emitido por doña Milagros Rómoli respecto de don Víctor Hugo Maire Orrego, de fecha octubre de 2022, agregado al folio 41.
- 12) Informe psicológico sobre las secuelas de la prisión política y tortura emitido por el Prais del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, de don Gastón Maire Orrego, de fecha julio de 2022, agregado al folio 41.

Documentos agregados legalmente al proceso y no objetados.



Foja: 1

QUINTO: Que, por su parte, la demandada rindió la siguiente prueba documental para justificar sus defensas o desvirtuar los argumentos y pruebas del actor:

Copia del oficio ORD.: DSGT N°4792-5719, de fecha 7 de marzo de 2022, remitido por el IPS, agregado con fecha 24 de mayo de 2024, al folio 47, no objetado.

SEXTO: Que, así las cosas, corresponde valorar las probanzas rendidas por las partes. En este sentido, no se registran impugnaciones, fundadas en causal legal, respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de la contraria, ni alegaciones respecto de las virtudes formales de los públicos. En consecuencia, se reconoce pleno valor probatorio a los instrumentos señalados, según su naturaleza, salvo los documentos privados emanados de terceros que no hayan sido ratificados en juicio, los que, en todo caso, serán considerados como indicios, como ocurre con el caso de la prueba documental psicológica, acompañada por la demandante; y se tienen como instrumentos públicos en juicio, los que tengan dicha naturaleza.

SÉPTIMO: Que conforme a los hechos reconocidos por las partes, se debe tener como hechos justificados en el proceso, la veracidad de haber sido los actores prisioneros políticos del régimen militar en dictadura, producido con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, y víctimas de violación a los derechos humanos, por torturas efectuadas por agentes de dicha Dictadura Militar; y que resulta efectivo, también, que han sido beneficiados con reparaciones de parte del Estado, por su calidad de víctimas de torturas, recibiendo, al menos, ciertas pensiones asistenciales, lo cual se desprende del reconocimiento efectuado en el escrito de réplica, donde las estimó insuficientes.

OCTAVO: Que previo a verificar si se dan los presupuestos para acceder a la responsabilidad extracontractual del Estado, por acciones de sus agentes, deberá revisarse si se dan los presupuestos legales para acceder a la primera defensa argumentada por el Fisco de Chile, esto es, la excepción de reparación integral deducida.

NOVENO: Que la excepción de reparación integral e improcedencia de la indemnización, deducida por la demandada se ha sustentado,



Foja: 1

esencialmente, en haberse producido una reparación del daño moral de los actores por dicha parte, conforme a lo previsto en la Ley N°19.123, y en que ellos habrían recibido, puntualmente, beneficios de la Ley N°19.992 sobre prisioneros y torturados políticos, en virtud de haber sido calificados como víctimas de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Valech 1 y 2, en la Nómina de personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura, consistente en pensión asistencial; un aporte único de reparación Ley 20.874, de \$1.000.000, además, de beneficios en derecho de gratuidad en prestaciones médicas, según Ley N°19.234, otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, en todos los servicios de salud públicos del país, que comprenden profesionales de atención exclusiva; beneficios educacionales, consistentes en becas para la víctima, para un hijo o para un nieto de aquel; y beneficios de vivienda, correspondientes a subsidios para tal efecto.

DÉCIMO: Que como ya ha quedado asentado en la motivación séptima, los actores han reconocido en juicio, en sus escritos de contestación y réplica, que son efectivas las prestaciones económicas que han percibido del Estado, en su calidad de víctimas de prisión política, tortura y exonerados políticos y que, por tanto, se les ha hecho pago de diversas sumas que comprenden a tales beneficios, no precisados por ellos.

Por otra parte, conforme el mérito del informe remitido por el Instituto de Previsión Social, de fecha 7 de marzo de 2022, agregado al expediente digital con fecha 24 de mayo de 2024, en folio 47, no objetado, puede establecerse por el tribunal, fehacientemente, que los actores han percibido como beneficios de reparación de las leyes números 19.234, 19.992 y 20.874:

Don Jorge Patricio Maire Orrego, desde febrero de 2005 a febrero de 2022, pensión Ley N°19992, \$31.787.986, por concepto de aporte único Ley N°20.874 de \$1.000.000, por concepto de aguinaldos \$562.653, siendo el total percibido de \$33.350.639, correspondiendo la pensión actual de esa época a \$207.774.

Don René Maire Orrego, desde febrero de 2005 a febrero de 2022, pensión Ley N°19992, \$32.099.941, por concepto de aporte único Ley N°20.874 de \$1.000.000, por concepto de aguinaldos \$562.653, siendo el



Foja: 1

total percibido de \$33.662.594, correspondiendo la pensión actual de esa época a \$227.185.

Don Víctor Hugo Maire Orrego, desde febrero de 2005 a febrero de 2022, pensión Ley N°19992, \$32.816.372, por concepto de aporte único Ley N°20.874 de \$1.000.000, por concepto de aguinaldos \$562.653, siendo el total percibido de \$34.379.025, correspondiendo la pensión actual de esa época a \$227.184.

Don Gastón Maire Orrego, desde marzo de 2005 a febrero de 2022, pensión Ley N°19992, \$32.414.874, por concepto de aporte único Ley N°20.874 de \$1.000.000, por concepto de aguinaldos \$562.653, siendo el total percibido de \$33.977.527, correspondiendo la pensión actual de esa época a \$227.185.

UNDÉCIMO: Que según lo previsto en el artículo 2° de la Ley N°19.123, en su parte pertinente, se dispone: *“Le corresponderá especialmente a la Corporación:*

1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley.”

De acuerdo con dicha disposición legal, resulta evidente que el objeto de las prestaciones que dicha norma contempla, están destinadas a la reparación de las víctimas de presión política y tortura, como es el caso del actor de autos.

DUODÉCIMO: Que de las demás disposiciones de la citada Ley N°19.123, que se refiere a la creación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y que establece Pensión de Reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que señala, resulta de manifiesto el esfuerzo que ha efectuado el Estado de Chile, para reparar, al menos en parte, el daño sufrido por las víctimas de tortura y prisión política durante el régimen militar, a través de la estructuración de pensiones y otros beneficios para los afectados y su grupo familiar, como también, reparaciones simbólicas, referidas a la memoria de los excesos y delitos cometidos en contra de las víctimas de torturas y prisión política de la Dictadura Militar, como memoriales, monumentos, efemérides, museos y otros.



Foja: 1

Cabe agregar que la estructura y prestaciones disponibles para el demandado, en materia de salud y de forma preferente, a través del programa PRAIS, implican un valor monetario adicional a disposición de los actores, independientemente de si éstos optaron o no por ocuparlos, lo que ocurre, también, con los beneficios de educación y vivienda.

DÉCIMO TERCERO: Que conforme a lo asentado precedentemente y lo reconocido por el actor en el proceso, debe tenerse por efectiva la reparación integral que ha efectuado el Estado con motivo de las torturas y prisión política que padeció de parte de agentes del Gobierno Militar en Dictadura, reparación que de acuerdo a las circunstancias y la capacidad económica del Estado de Chile, debería estimarse suficiente, considerando, por una parte, que las torturas y dolor infringido al demandante, jamás podrían ser reparadas con suma alguna, pero también por otro lado, que el Estado también ha sido víctima de un gobierno de facto, que alteró la institucionalidad, precisamente, por los órganos llamados a defender al Estado y a las personas que lo componen.

A mayor abundamiento, debe considerarse, también, que ha sido el propio Estado de Chile, el que ha propendido acciones para poder establecer quienes han sido víctimas de tortura y prisión política, durante el régimen militar, para poder, precisamente, tratar de efectuar las reparaciones que en Derecho corresponden, bajo un procedimiento administrativo más simplificado y que opera bajo el principio de la buena fe, evitando la judicialización del establecimiento de la calidad de víctima de violación a los derechos humanos.

DÉCIMO CUARTO: Que sin perjuicio de lo anterior, la interpretación sistemática de las normas dispuestas por las Leyes 19.123 y 19.992, permite deducir que la bonificación de reparación instaurada en favor de ciertos familiares de ejecutados políticos y de víctimas directas de delitos de lesa humanidad, constituye un beneficio de carácter social, no una indemnización del daño moral sufrido por éstas, pues, en la determinación de su cuantía no se aprecia que se hayan considerado elementos particulares y/o personales de quienes soportaron dicho sufrimiento; requisito esencial a la hora de fijar una indemnización que no puede ser entendida sino con la finalidad de reparar o compensar un perjuicio cierto y determinado, no



Foja: 1

existiendo una incompatibilidad entre dichas compensaciones y aquellas que legítimamente y por vía jurisdiccional pretendan las víctimas, cuando se aprecie la existencia de un daño que no ha sido reparado íntegramente.

En consecuencia, las Leyes 19.123, 19.992 y 20.874, no pueden substituir la pretensión de compensación del daño moral soportado por el actor, añadiéndose que los beneficios conferidos por dichas normas sólo apuntan a edificar políticas asistenciales del Estado, respecto de los familiares de las víctimas o de ellas mismas, sujetas a condiciones objetivas, lo que evidencia que no se trata de una reparación total y efectiva del daño sufrido por las víctimas.

DÉCIMO QUINTO: Que, como consecuencia de lo razonado en las motivaciones anteriores, deberá acogerse parcialmente la excepción de reparación integral, deducida por la demandada, por haber sido ya indemnizados de manera objetiva los actores en virtud de ello, en los términos expuestos precedentemente, considerándose dicha reparación solo con la finalidad de determinar el quantum del monto a indemnizar por daño moral.

DÉCIMO SEXTO: Que, sin perjuicio de lo referido precedentemente, deberá determinarse, a continuación, si se dan los presupuestos de derecho para poder acoger la excepción de prescripción opuesta, en forma subsidiaria.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que respecto a la prescripción de la acción en materia de derechos humanos se debe considerar, que el sistema de responsabilidad del Estado deriva de los artículos 6° inciso tercero de la Constitución Política de la República y 3° de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, preceptos que, de aceptarse la tesis de la defensa, quedarían sin aplicación, siendo obligatoria su observancia, que por su parte los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por ilícitos de esta clase, queda sujeta a las reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas, ni hacer primar el derecho interno, dado que ilícitos imputable a un Estado, surgiendo de esa forma la responsabilidad internacional de éste por la



Foja: 1

violación de una normas de Derechos Humanos y como consecuencia nace el deber de reparación y de cesar los actos de vulneración denunciada.

De esa forma las normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales de justicia, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de Derecho Internacional que consagran el derecho a la reparación, pues ello comprometería la responsabilidad internacional del Estado de Chile, ya que, el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados disposición constitucional, son vinculantes, como ocurre con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado.

DÉCIMO OCTAVO: Que, se hace necesario destacar que en los sucesos reseñados y que constituyen el fundamento de la acción, intervinieron agentes del Estado, lo que evidencia una contravención a lo preceptuado en el artículo 6° de la Constitución Política de la República, que obliga a los órganos del Estado a someter su acción a ella, a las normas dictadas conforme a la misma y al artículo 5° de nuestra Constitución, en cuanto el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; siendo deber de aquellos respetar y promover tales derechos garantizados. Esta última disposición constitucional hace posible incorporar al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, tales como la de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que, en consecuencia, adquiere rango constitucional.

Así las cosas al tratarse el presente caso de una demanda civil que se sustenta en un delito que, de acuerdo a la conciencia jurídica se denomina de “*lesa humanidad*”, se puede concluir que tal calificación no sólo trae aparejada la imposibilidad de amnistiar el ilícito y declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que también implica la inviabilidad de proclamar la extinción, por el solo transcurso del tiempo, del



Foja: 1

derecho de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito cuya existencia ha sido pacífica, de forma tal que este tipo de ilícitos, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna.

DÉCIMO NOVENO: Que, conforme lo señalado, se concluye que proceden las indemnizaciones que se reclaman, atendiendo al contexto en que se verificaron los delitos, esto es, en un momento de extrema anormalidad institucional, en que los hechores -agentes del Estado- en representación del gobierno de la época, como quedó asentado en el proceso, ejecutaron ilícitos de tal gravedad, que imponen al Estado de Chile la obligación de resarcir el daño causado, tal como se desprende del bloque normativo integrado, entre otros, por el Reglamento de La Haya de 1907, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Resolución 2005/35, de 19 de abril de 2005 de la Comisión de Derechos Humanos, que en su conjunto consagran el derecho a buscar y conseguir plena reparación, incluida la restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, imponiendo tal resarcimiento al respectivo Estado que ha violado los derechos humanos de sus ciudadanos.

Sin perjuicio de lo anterior, ahora cabe determinar el *quantum* del detrimento resultado de los agentes del estado, a lo cual se considera lo complejo de su determinación, dado que ningún monto podrá resarcir completamente a la ofendida, ni restablecerla a la situación anterior al acaecimiento de los hechos.

Sin embargo, la indemnización por daño moral es meramente satisfactoria, lo que viene a significar que con ella se pretende una ayuda o auxilio que le permita a la víctima atenuar el daño.

VIGÉSIMO: Que, en relación con lo anterior, ha quedado demostrado que los actores fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, puesto que sufrieron privación ilegítima de libertad y torturas por razones políticas, perpetrada por agentes del Estado, en los términos y magnitudes que se consignaron en este fallo. Luego, la pretensión indemnizatoria, claramente deriva de los padecimientos físicos y emocionales que han tenido que sobrellevar; hechos que además, que no han sido objeto



Foja: 1

de contradicción, dando cuenta del estrés post traumático de carácter grave y extenso que afecta a los actores, alteraciones en su salud mental producto de los acontecimientos que debieron enfrentar como víctimas de prisión política y tortura; y por lo tanto, conforme a la experiencia científica, los menoscabos permanentes en la salud mental y física de las víctimas de este tipo de ilícitos.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, con todo lo señalado, la cuantificación del daño se hará prudencialmente por el tribunal, habida consideración la naturaleza, entidad y extensión del mismo, teniendo para ello especialmente presente, las circunstancias en que se produjeron los hechos, la edad de los actores a la época en que fueron detenidos e ilegítimamente apremiados; la duración y entidad de los padecimientos físicos y emocionales sufridos; y los montos judicialmente asignados tanto a las víctimas directas de violaciones a los derechos humanos en causas similares, como a los hijos y padres de ejecutados políticos.

La suma que se fijará a título de indemnización deberá pagarse reajustada de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en que la presente sentencia quede ejecutoriada y su pago; así reajustada, devengará intereses corrientes para operaciones reajustables en el mismo lapso.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que la demás prueba rendida, no detallada o considerada en forma especial, en nada incide en lo asentado precedentemente.

VIGÉSIMO TERCERO: Que en cuanto a las costas de la causa cada parte soportará las propias, debido a no haber resultado totalmente vencida la demandada.

Por estas consideraciones, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 160, 170, 254 y siguientes, 342, 399, 426 del Código de Procedimiento Civil; 1º, 4º, 6º, 7º, 19, 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 4.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1º de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención contra la Tortura y otros Tratos Cruels,



Foja: 1

Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas; La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; Los Convenios de Ginebra de 1949; Principios de Núremberg; y art.7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se declara:

I.- Que **se acoge la demanda** deducida en lo principal del escrito de 9 de junio de 2020, al folio 1, y se condena al demandado a pagar al actor, don **Jorge Patricio Maire Orrego**, la suma de **\$50.000.000** (cincuenta millones de pesos) por concepto de indemnización de perjuicios, a título de daño moral.

II.- Que **se acoge la demanda** deducida en lo principal del escrito de 9 de junio de 2020, al folio 1, y se condena al demandado a pagar al actor, don **René Maire Orrego**, la suma de **\$10.000.000** (diez millones de pesos) por concepto de indemnización de perjuicios, a título de daño moral.

III.- Que **se acoge la demanda** deducida en lo principal del escrito de 9 de junio de 2020, al folio 1, y se condena al demandado a pagar al actor, don **Víctor Hugo Maire Orrego**, la suma de **\$20.000.000** (veinte millones de pesos) por concepto de indemnización de perjuicios, a título de daño moral.

IV.- Que **se acoge la demanda** deducida en lo principal del escrito de 9 de junio de 2020, al folio 1, y se condena al demandado a pagar al actor, don **Gastón Maire Orrego**, la suma de **\$40.000.000** (cuarenta millones de pesos) por concepto de indemnización de perjuicios, a título de daño moral.

V.- Que **se acoge parcialmente** la excepción de reparación integral del Estado, en los términos considerados en el motivo décimo quinto.

VI.- Se **rechaza**, la excepción de prescripción interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado.

VII.- Que cada parte pagará sus costas.

Anótese, regístrese y notifíquese.

Pronunciada por doña **Cecilia Pasten Pérez**, Juez Suplente. /dbh



C-8770-2020

Foja: 1

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, quince de Julio de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EXHSXXDBBZX